

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL
Medellín, doce (12) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

DEMANDANTES	: ELIANA MARÍA GUZMÁN CAÑAS
DEMANDADO	: LUZ MERCEDES PATIÑO JIMÉNEZ
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-360-31-05-001-2022-00240-01
RADICADO INTERNO	: 008-24
DECISIÓN	: MODIFICA PARCIALMENTE Y CONFIRMA SENTENCIA
ACTA NÚMERO	: 035

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelve el **recurso de apelación** en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, la providencia en segunda instancia se profiere escrita.

ANTECEDENTES

La parte demandante, solicita DECLARE que la Sra. Luz Mercedes Patiño Jiménez, propietaria del establecimiento comercial LUZ ESTETICA SPA, violó el contrato verbal a término indefinido, celebrado con la demandante el 22 de octubre de 2017, al haber despedido sin justa a la actora sin realizar el pago de la indemnización del art. 64 del CST; que la demandada no pagó las prestaciones sociales causadas del 1º de enero al 7 de julio de 2022, ni las vacaciones desde el 1º de octubre de 2021, no consignó en un fondo el auxilio de cesantías de los años 2017 a 2021, no pagó el auxilio de transporte desde su vinculación, ni la seguridad social.

Como consecuencia, se CONDENE a la demandada al pago de:

- Auxilio de cesantías del 1º de enero de 2022 al 7 de julio de 2022, teniendo como salario base, incluyendo el auxilio de transporte, la suma de \$1. 317.172

- Interés a la cesantía
- Vacaciones del 1º de octubre de 2021 al 7 de julio de 2022
- Prima de servicios del 1 de enero de 2022 al 7 de julio 2022
- Auxilio de transporte del 22 de octubre de 2017 al 7 de julio 2022
- Calzado y vestido de labor
- Indemnización despido injusto del art. 64 del CST
- Indemnización moratoria del art. 65 del CST desde el 8 de julio de 2022 hasta el pago
- Sanción moratoria del art. 99 de la Ley 50 de 1990
- Los aportes al sistema de seguridad social en pensiones a Protección S.A, dejados de consignar del 22 de octubre de 2017 al 7 de julio de 2022
- Al pago de las costas procesales
- Y que las sumas que la parte demandada deba pagar, sean actualizadas al momento del pago, según la variación del IPC, con sus respectivos intereses.

Fundamenta sus pretensiones manifestando que, la demandante fue contratada el 22 de octubre de 2017 por un contrato verbal, para administrar el establecimiento comercial LUZ ESTETICA SPA; que el horario establecido era de lunes a viernes de 9am a 7pm y sábados de 9am a 4pm; que el salario asignado a la demandante fue de \$1.200.000 mensuales, con pagos quincenales los días 20 y 5 de cada mes y la demandada autorizaba que dichos pagos fueran tomados por Sra. Eliana María Guzmán Cañas, de lo recaudado en el SPA en las fechas acordadas y cuando no se recaudaba el total de la quincena, debía completarlo con lo del día siguiente, por lo que los pagos eran inconsistentes.

Aseguró que las funciones eran de administradora, cosmetóloga, aseo general, mensajería, recaudos y pagos y estos últimos eran registrados por la demandante en un cuaderno de seguimiento, por orden de la demandada, el cual revisaba y aprobaba; que el 29 de junio de 2022 le realizan descargos por la presunta apropiación de la suma de \$500.000 que una cliente, la cual le consignó en la cuenta de la demandante el 18 de junio de 2022, dinero que tomo para el pago de la quincena del 20 de junio de 22, previa autorización verbal por la empleadora, pero dicha situación la desconoció la demandada a pesar de haber plasmado su firma de aceptación en el cuaderno de seguimiento el 21 de junio de 2022.

Que en los descargos no se probó la apropiación de los dineros, porque se exhibió documento de seguimiento del 21 de junio de 2022 que acreditaba la aceptación y autorización de la demandada y la demandada no hizo otro pago en la quincena del 20 de junio de 2022, distinto a los \$500.000 recibidos de la cliente del SPA; que la accionada no pago los \$100.000 que restaba del salario, dado que la quincena correspondía a \$600.000; la Sra. Luz Mercedes Patiño Jiménez no demostró en los descargos la culpabilidad de la Sra. Eliana María Guzmán Cañas y pese a ello decidió despedirla sin reconocer la indemnización pro despido injusto; el 7 de julio de 2022 el esposo de la demandada despidió a mi demandante como resultado de los descargos, argumentando una justa causa.

Desde el 22 de octubre de 2017 hasta el 7 de julio de 2022, no le pagaron a la demandante mandante la seguridad social, el auxilio de transporte, suministro calzado ni vestido de labor y no consignaron el auxilio de cesantía en un fondo. Desde el despido y hasta la fecha de la presentación de esta demanda, no ha liquidado y pagado las prestaciones sociales, vacaciones (01/10/21) ni el excedente de \$100.000 de la quincena del 20 de junio de 2022, ni el salario de la quincena del 5 de julio de 2022 y del 06 al 7 del mismo mes y año.

RESPUESTAS A LA DEMANDA

En la contestación se indicó que la función principal de la demandante, que consta en el contrato de trabajo, era la de cosmetóloga y cuando el personal era escaso hacía labores de apoyo de aseo general, mensajería, recaudos y pagos y a medida de que pasó el tiempo, fue desempeñando labores de administración con mayor autonomía en la programación de pagos como nóminas y pagos de seguridad social; que dichos pagos se registraban en un cuaderno de seguimiento de manera diaria, que era revisado y firmado por la Sra. Luz Mercedes Patiño Jiménez y en colillas de conciliación de caja. Dijo que los demás hechos de la demanda no son ciertos, explicando que la contratación de la demandante lo fue el 18 de octubre de 2018; la jornada era de 48 horas laborales y el horario era de lunes a viernes de 9am a 12:30pm y de 2pm a 7pm y sábados de 9am a 12:30 pm y de 2pm a 4pm; el salario pactado era el mínimo legal; y los pagos se liquidaban de acuerdo a las ventas del SPA; que la demandante fue citada a descargos el 25 de junio de 2022 pero por solicitud de la trabajadora se aplazaron para el 29 de junio de 2022 y en los descargos se le invitaba a explicar las razones por las cuales le había dicho a una cliente que consignara \$500.000 el 18 de junio de 2022 sin autorización de la jefe; que no

es cierto que ese dinero correspondiera a su quincena porque el 20 de junio era lunes festivo y el pago estaba programado para el 21 de junio de 2022, lo cual fue confirmado por la demandante en los descargos; señala que en el contexto de los descargos no se demuestra que la demandada haya autorizado previamente a tomar el dinero; sostiene que con los descargos se probó que no existía autorización previa para que la demandante solicitara a una cliente que le consignara a su cuenta personal, la demandante incumplió los procedimientos establecidos para las consignaciones porque toda consignación debía hacerse a nombre de la Sra. Luz Mercedes Jiménez vía transferencia o por pago QR, como la misma demandante lo explicó, de lo dicho pro la demandante se prueba que de no recibir efectivo no podía recibir su pago y debía esperar hasta que su jefa directa cuadrara caja, lo que prueba que la cliente fue inducida a un error al consignar dinero de la empresa por fuera de los procedimientos establecidos. Aseguró la demandada que existió afiliación a la seguridad social y el pago a su cargo, que existieron inconsistencias debido al desconocimiento de la demandada de la norma laboral, pero ambas llegaron a acuerdos y la demandante en forma voluntaria se afilió como independiente y realizó la gestión ante Porvenir S.A y Savia Salud EPS; que a pesar que la afiliación se hizo en forma errónea, los pagos eran realizados mes a mes por la empleadora y ello se prueba con los registros de salidas de caja menor del establecimiento, los recibos de consignación en Banco de Bogotá y el informe de ARUS. Asegura haberse realizado el pago de auxilio de transporte, auxilio de cesantías y dotación; el pago de la liquidación fue consignada el 3 de agosto de 2022 por valor de \$966.759.

Se opuso a las pretensiones de la demanda. Propuso las excepciones de cumplimiento por parte de la Sra. Luz Mercedes Patiño Jiménez de todas las obligaciones laborales durante la relación laboral, buena fe contractual, mala fe del demandante, prescripción laboral (expediente digital 12).

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 14 de diciembre de 2023, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Itagüí, se CONDENÓ a la Sra. Luz Mercedes Patiño Jiménez a efectuar el pago a favor de la demandante de:

- \$113.565. por concepto de vacaciones causadas entre el 01 de octubre de 2021 y el 31 de diciembre del mismo año.
- \$4.509.394 por concepto de auxilio de transporte.

- \$2.790.000 por concepto de indemnización por despido injusto.

Condenó a la demandada a pagar a la Sra. Eliana María Guzmán Cañas, el título pensional, previo cálculo actuarial que realizará el fondo al cual se encuentre afiliada la demandante, por el periodo comprendido entre el 22 de octubre de 2018 y el 30 junio de 2020, teniendo en cuenta como salario base de cotización el salario mínimo legal mensual vigente para cada anualidad; a reembolsar a la Sra. Eliana María Guzmán Cañas el valor de los aportes a pensión correspondiente a las cotizaciones realizadas por los periodos comprendidos entre julio de 2020 y julio de 2022, con base en el salario mínimo legal mensual vigente de cada anualidad, sumas que serán canceladas debidamente indexadas.

ABSOLVIÓ a la demandada de las demás pretensiones formuladas en su contra. Costas a cargo de la parte demandada.

Decisiones que se adoptaron, al dar por probada como extremo inicial el 22 de octubre de 2018 y no en el año 2017, al no darle credibilidad a la testigo Claudia Elena Zapata (testigo de la parte demandante) por no ser creíble que recordara en forma precisa la fecha de ingreso a sabiendas que se trataba de una clienta y por la falta de permanencia en el establecimiento, por su parte la Sra. Nancy del Socorro Ríos Jiménez (testigo de la demandada) le brindaba ayuda en la elaboración de recibos y comprobantes de prestaciones sociales indicó que la demandante estuvo vinculada desde el año 2018, lo cual concuerda con el contrato de trabajo a término indefinido suscrito por las partes que da cuenta haberse celebrado el 22 de octubre de 2018 y adoptar como salario devengado el mínimo legal que reposa en el contrato y coincide con el reportado como IBC y se tuvo en cuenta en la liquidación de las prestaciones sociales, sin ser de recibo que percibiera un salario superior debido a responsabilidades que tenía.

Con el comprobante de pago aportado, acreditó la accionada el pago de las prestaciones sociales y vacaciones causadas en el último año de servicio. Condenó al pago de las vacaciones del 1º de octubre al 31 de diciembre de 2021 por no haberse aportado comprobante de pago. Condenó al pago del auxilio de transporte del 22 de octubre de 2018 al 7 de julio de 2022 porque de las colillas de pago aportadas no se extrae que las sumas consignadas hayan ingresado al patrimonio de la demandante ni que fueran por el concepto que presuntamente se cancelaron.

Absolvió del pago de la dotación de calzado y vestido de labor porque conforme lo señalado por la Corte Suprema de Justicia, no tiene sentido hacer su reclamación al finalizar el vínculo laboral y cuando se ha incumplido su pago, se puede solicitar el pago de los perjuicios, sin embargo, negó su reconocimiento, al no haber solicitado ni haber acreditado los perjuicios.

En igual sentido negó el pago de la indemnización y sanción moratoria de los arts. 65 del CST y art. 99 de la Ley 50 de 1990, al haberse realizado el pago de la liquidación de prestaciones sociales el 3 de agosto de 2022 sin superar un mes de haberse presentado la terminación del vínculo laboral y al no haberse evidenciado mala fe. A lo anterior se adicionó como justificación para negar la sanción moratoria, que si bien no se acreditó la consignación del auxilio de cesantía el pago se efectuó a la demandante en vista que no hubo reparo ello, además porque la testigo Nancy del Socorro Ríos Jiménez confirmó que el pago se hizo en forma directa a la demandante, y se probó el pago de dicha prestación económica a la terminación del contrato, con lo que concluyó que no hubo aprovechamiento indebido por parte de la Sra. Luz Mercedes Patiño Jiménez.

Por otro lado, condenó al cálculo actuarial por la omisión en la afiliación del 22 de octubre de 2018 al mes de junio de 2020 por no existir prueba de la afiliación pese a existir en ese periodo vinculación laboral. Y la orden de reembolsar a la demandante el valor de los aportes a pensión de los periodos de julio de 2020 a julio de 2022 se generó ante la intención de defraudar al sistema al afiliarse a la demandante como trabajadora independiente y porque no existe prueba que los pagos realizados a la seguridad social provinieran del peculio de la empleadora.

Y condenó a la indemnización por despido injusto porque al analizar los descargos realizados a la demandante, se indicó que la demandada dio previa autorización verbal para que la demandante tomara el dinero que sería cancelado el 18 de junio de 2022 como parte del pago, sin que se haya especificado si el pago era efectivo o transferencia, lo que fue confirmado en el interrogatorio de parte, la transferencia que haya sido realizada por la cliente a la demandante, sin embargo advirtió la A Quo, que las testigos informaron sobre la autonomía que tenía la Sra. Eliana María Guzmán Cañas para manejo de los dineros que entraban al SPA, al ser ella quien pagaba su propia nómina previa autorización de la empleadora, autorización que podía ser verbal, y

resaltó que la accionante contaba con facultad discrecional al punto de que la compañeras de trabajo Claudia Luna la denominara como la segunda jefe; que si bien había limitación de tomar sin autorización el dinero correspondiente a su quincena, ello fue tolerado por la empleadora, la cual confesó en el interrogatorio que la demandante hacía autopréstamo. Con base en esa tolerancia y al haberse obtenido autorización verbal de la demandada para realizar el pago, considera que llevó a actuar de la demandante, considerándose que el acto reprochado no es de la gravedad que establece la norma para que sea justificativa de la terminación del vínculo, al ser una conducta recurrente de la demandante el disponer de los dineros del establecimiento y ella se proporcionaba el pago.

IMPUGNACIÓN

El apoderado de la parte demandante en primer lugar, solicita el reconocimiento de la indemnización moratoria del art. 65 del CST pues de su contenido es claro en decretar la sanción por el no pago oportuno de las prestaciones sociales y en la sentencia se condenó al pago de las vacaciones y el auxilio de transporte, lo que constituye una mora; además de que la liquidación se tuvo que haber pagado en pagado en el momento oportuno, y si bien se reconoció la existencia de una consignación, solicita se tenga en cuenta lo que dejaron de pagar por prestaciones sociales; y la norma no habla que la liquidación se debe hacer parcial sino que señala que el no pago de las prestaciones sociales de manera oportuna da derecho a que el demandante reclame la sanción moratoria.

En segundo lugar, presenta reparo por la negación de la sanción del art. 99 de la Ley 50 de 1990 por considerar que las garantías laborales están protegidas constitucionalmente por los arts 42, 48 y 53 de la CP y la sentencia SU 098 de 2018; manifiesta que no es obligación del trabajador corregir a su empleador, si este no realiza los pagos conforme a la ley; resalta que la demandante se trata de una persona que contaba con asesoría, que aceptar el actuar de la demandada es pasar un acto de irresponsabilidad del empleador, y frente al no pago o la falta de consignación existe la sanción.

En tercer lugar, solicita que sea reconocidos los perjuicios por la falta de entrega de la dotación de calzado y vertido de labor en virtud de la pretensión ultra y extra petita, toda vez que se está frente a un Juez Constitucional que debe de generar la protección de los derechos y la absolución de esta

pretensión afectan derechos de la demandante y generaría que la demandada siga incurriendo en las faltas al no haber existido sanción.

En cuarto lugar, solicita evaluar el monto condenado por costas procesales.

Aunado a lo anterior, destaca que si bien, la Sra Nancy dijo haber hecho una carta para el despido de la demandante, ello no corresponde con los hechos narrados o presentados al juzgado y resalta las declarantes fueron concordantes en hablar de las irregularidades que se presentaron en esa empresa, lo cual fue un común denominador respecto a las responsabilidades u obligaciones laborales que conocía.

El apoderado de la parte demandada interpone recurso de apelación frente a la valoración que hace el despacho de la prueba documental, pues de haberse analizado en forma exhaustiva y haber realizado una operación aritmética, se hubiera percatado del pago del auxilio de transporte por todo el tiempo.

Afirma que las liquidaciones aportadas, las cuales no fueron tachadas ni objetadas, en caso de haber sido valoradas, se evidenciaría el pago de las vacaciones que fueron condenadas, por lo tanto, se opone a su reconocimiento.

En tercer lugar, se aparta de la interpretación que se hace frente el despido y al pago de la indemnización por despido injusto, aduciendo que en el presente evento se demostró un procedimiento sano frente al despido de la trabajadora y se demostró que la accionante cometió una ligereza; destaca que una cosa es que se autorice la transferencia de los fondos a la cuenta bancaria del establecimiento de comercio o que se reciba en efectivo entre el establecimiento de comercio y otra cosa distinta es que el dinero se reciba directamente en la cuenta bancaria de la trabajadora, que allí radica el problema y el despacho no lo logró interpretar en qué consistía la falta de delicadeza de la trabajadora.

En cuarto lugar, dice que no fueron tenido en cuenta la declaración de los testigos en lo relacionado al pago de la seguridad social; que fue la misma demandante quien consideró prudente que el pago se hiciera a su nombre y la declaración de la testigo Nancy del Socorro Ríos Jiménez así lo determinó y que el pago provino del patrimonio del empleado.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El apoderado de la parte demandada en sus alegatos reitera lo manifestado en el recurso de apelación.

CONSIDERACIONES

El problema jurídico en esta instancia se centra en determinar en virtud del **recurso de apelación**: i) Si la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago del auxilio de transporte, vacaciones, a la indemnización por despido sin justa causa; a la indemnización de perjuicios por el no pago del calzado y vestido de labor; al pago de la seguridad social; ii) Si tiene derecho al pago de la indemnización y sanción moratoria del art. 65 del CST y art. 99 de la Ley 50 de 1990; iii) A modificar el monto de las costas procesales impuestas.

Partiendo de lo anterior el problema jurídico se resolverá en el siguiente orden:

1. Del auxilio de transporte y las vacaciones

En primera instancia se condenó a su reconocimiento aduciendo que pese a que reposen en las colillas de pago de febrero a junio de 2022 no se evidencia que ese valor haya ingresado al patrimonio de la demandante, por lo que condenó al pago por el periodo comprendido del 22 de octubre de 2018 y el 7 de julio de 2022. Decisión que es apelada por la parte accionada al considerar que no se valoró correctamente la prueba documental aportada.

Al respecto, luego de ser analizada en forma detallada los documentos denominados “Cuadre diario de caja SPA” que reposan a fls 53 a 67 del expediente digital 12, debe decirse que en ellos no se observa el pago del auxilio de transporte, teniendo en cuenta los siguientes pagos realizados:

- El 31-01-20 se reporta el pago de quincena por la suma de \$200.000 (fl. 53)
- El 25-02-21 se reporta pago de salario la suma de \$100.000 (fl. 56)
- El 04-02-21 y 17-02-21 se reporta pago de salario por \$200.000 (fl. 59, 60 y 64)

De lo anterior se refleja, que si el salario de la demandante para el año 2020 era de \$877.803 y para el año 2021 de \$908.526, el pago realizado no superó el salario mínimo legal y por ello no se suplió el auxilio de transporte.

Por otra parte, aparece el pago de este concepto por los meses de febrero a junio de 2022 en los comprobantes de nómina de fls. 70 a 80, los cuales cuentan con la firma de la demandante; documentos de los que se extrae que el salario para dicha anualidad era de \$1.000.000, los pagos quincenales de salario fueron de \$500.000 y por el auxilio de transporte \$58.576, en consecuencia, pese a no existir prueba que el valor del auxilio de transporte haya ingresado al patrimonio de la parte accionante, no se puede pasar por alto que los recibos cuentan con la firma de la accionante, lo que confirma su recepción.

En consecuencia, se MODIFICARÁ PARCIALMENTE la condena impuesta por concepto de auxilio de transporte, y en su lugar se CONDENARÁ a la Sra. Luz Mercedes Patiño Jiménez a reconocer y pagar la suma de **\$3.875.437** por el auxilio de transporte causado desde el 22 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2021.

AÑO	AUXILIO DE TRANSPORTE	MESES	VALOR
2018	\$ 88.211,00	2,26	\$ 199.357
2019	\$ 97.032,00	12	\$ 1.164.384
2020	\$ 102.854,00	12	\$ 1.234.248
2021	\$ 106.454,00	12	\$ 1.277.448
TOTAL			\$ 3.875.437

En lo que respecta a las vacaciones, no le asiste razón a la parte accionada cuando asegura la existencia de prueba del pago de las mismas en la prueba documental aportada, lo que da lugar a CONFIRMAR la condena impuesta por este derecho laboral.

2. Indemnización de perjuicios por el no pago del calzado y vestido de labor

Al tenor de lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley 11 de 1984, si bien es cierto que dicha dotación debe ser suministrada cada 4 meses, por los empleadores que tenga uno o más trabajadores permanentes, lo cierto es que por medio de la sentencia del 15 de abril de 1998 la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia expuso en primer lugar, que dicho suministro carece de sentido a la terminación del contrato de trabajo, luego de que su razón de ser

se genera cuando el trabajador se encuentra activo, pues en caso de estar cesante no lo utilizaría en la labor para la cual fue contratada y en sentencia T 492 de 2005 la Corte Constitucional señaló *“En primer lugar, esta Sala de Revisión considera que es razonable la interpretación de la Sala Laboral acerca de que la Caja **no estaba obligada a entregar las dotaciones de vestido y calzado por el período en que los demandantes estuvieron por fuera de su trabajo** – es decir, entre el 30 de junio de 1999 y el 29 de octubre de 2000. **Dado que este suministro tiene por fin brindarle ropa adecuada al empleado para que realice su trabajo**, es plausible la conclusión de que el empleado no tiene derecho a esa vestimenta cuando no ha realizado ninguna actividad laboral, independientemente de la causa de ello (...)*” (Resalto de la Sala). Y, en segundo lugar, porque el artículo 234 del CST prohibió su compensación en dinero; sin embargo, dio la posibilidad que frente al incumplimiento se generara el derecho a la indemnización de perjuicios a cargo del empleador.

En este sentido, no hay lugar a su reconocimiento, pues solo aparecen el registro de \$35.000 por el concepto de “uniforme”, en enero de 2019 registro de “saco para uniformes” \$84.000, recibo de tecnomédica del 28 de marzo de 2019 y \$45.000 por concepto de uniforme del 29 de abril de 2021 (fls. 64 a 67 del expediente digital 12), sin que repose constancia de entrega de dotación directamente a la demandante para prestar su labor, se resalta que la solicitud de esta dotación se solicita con posterioridad a la terminación del vínculo laboral, por lo que se debe concluir que no le asiste el derecho a la parte actora al haber finalizado el vínculo laboral y su reconocimiento no acogería la finalidad de dicho concepto.

Y otra de las razones para negar su reconocimiento, es porque además de no haber sido solicitado el pago de perjuicio por la falta de entrega de dicha dotación, era la demandante quien tenía la carga de la prueba de demostrar los perjuicios que le fueron ocasionados, prueba que no milita en el plenario, razón por lo que se CONFIRMARÁ la decisión de primera instancia.

3. De la indemnización y sanción moratoria de los arts. 65 del CST y art. 99 de la Ley 50 de 1990

Al respecto, de forma reiterada ha señalado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que la imposición de estas indemnizaciones, no es automática, por lo que debe el juez abordar en cada caso los aspectos relacionados con la conducta que asume el empleador para sustraerse del

pago de las obligaciones laborales (sentencias SL 5528 de 2019 y SL 5595 de 2019).

En lo que respecta a la indemnización del art. 65 del CST, considera esta Corporación que no es procedente su reconocimiento, bajo el entendido que el art 65 del CST reza *“Si a la terminación del contrato, el {empleador} **no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidos**, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado, como indemnización, una suma igual al último salario diario por cada día de retardo. (...)”* (Resalto de la Sala) y en este evento se condenó al a la demandada al pago de vacaciones, auxilio de transporte, indemnización por despido injusto, calculo actuarial ante la falta de afiliación al sistema de seguridad social en pensiones en los años 2018 a 2020 y al reembolso de los aportes cancelados por la demandante como trabajadora independiente en pensiones en los años 2020 a 2022, conceptos que no hacen parte de las prestaciones sociales ni salarios, debiendo ser CONFIRMADA la absolución.

Igual suerte corre la sanción moratoria del art. 99 de la Ley 50 de 1990, pues nótese que en las pretensiones de la demanda se solicitó únicamente el reconocimiento del auxilio de cesantía del 1º de enero al 7 de julio de 2022 y en el plenario aparece el reporte de pagos parciales entregados a la Sra. Eliana María Guzmán Cañas en forma directa el 31-01-20, 18-01-20, 5-02-20, 23-02-21, 18-03-21, 07-04-21, 07-03-21, 04-02-21, 25-01-22, 09-02-22, 21-02-22, 07-02-22 (fls. 53 a 56, 57 a 61, 64 del expediente digital 12) y está acreditado el pago de la liquidación definitiva de prestaciones sociales realizada el 3 de agosto de 2022, ello es, 26 días después de la terminación del contrato que tuvo lugar el 7 de julio de 2022 (fls. 52).

Y en la sentencia SL 7335 de 2014, en donde se analizó un evento en donde el empleador realizó el pago directo del auxilio de cesantía al trabajador, se manifestó lo siguiente:

*“(...) Sin embargo, puede ocurrir que el empleador incurra en el pago irregular de esta prestación, esto es, que **no las consigne en un fondo sino que las entregue directamente al trabajador**. Para esta clase de situaciones que no siguen los lineamientos que al respecto ha señalado la ley laboral, **existe una sanción específica que se encuentra en el artículo 254 del C.S.T.** y que lo es la pérdida de lo pagado por ese concepto. Así lo ha adoctrinado esta Sala de la Corte, por ejemplo, en sentencia CSJ SL, 26 sep. 2006, rad. 27186.*

En el presente asunto, no es materia de controversia que el empleador pagó directamente a su trabajadora las cesantías causadas por cada

uno de los períodos indicados en las documentales de folios 26, 159, 161, 162, 168 a 169, 171, 180 a 181 y 184 a 185. La anterior conducta conllevó a que las instancias lo sancionaran con la pérdida de lo sufragado directamente al trabajador, y en consecuencia, se ordenara nuevamente su pago.

En este orden, no resulta procedente volver a gravar al demandado con una sanción cuando su conducta ya fue castigada con la condena por concepto de cesantías y que se traduce en el pago doble de éstas. (...) (Resalto de la Sala)

En consecuencia, no se demuestra mala fe en el actuar de la demandada, bajo el entendido que en ningún momento la Sra. Luz Mercedes Patiño Jiménez retuvo ni se benefició del dinero que le correspondía reconocer a su trabajadora por auxilio de cesantías, sino que este le era entregado a la demandante la cual disfrutó de dicho pago y se realizó el pago de la liquidación de prestaciones sociales se hizo en un término prudencial y sin superar un mes de la terminación del contrato, por lo que se considera legal y pertinente CONFIRMAR la decisión absolutoria.

4. Indemnización por despido sin justa causa

Decisión que será CONFIRMADA por esta Sala, teniendo en cuenta que:

- En los descargos absueltos por la Sra. Eliana María Guzmán Cañas, aseguró que le había recordado a su empleadora el pago de la quincena y de la prima del mes de junio de 2022, la cual le dio autorización para tomar el dinero de la usuaria Erica Viviana para realizar el pago; que el procedimiento para usar el dinero es porque la empleadora le da la instrucción específica para utilizar el dinero; que las usuarias podían pagar en efectivo o por transferencia y cuando es por el último, ella le daba el número de la cuenta del SPA o pagaban por QR; que la demandante le informó a la usuaria Viviana Luengas que tenía autorización para que le realizara la consignación en su cuenta personal (fls. 24 a 30 del expediente digital 12)

- En la carta de terminación del contrato se invocó el exceso de atribuciones de la demandante y haberle solicitado a una clienta efectuar la transferencia a su cuenta personal, desconociendo el proceso donde según los descargos, el dinero debía ser transferido a la cuenta de la demandante o pagar por QR. Allí mismo se indicó (fls. 32 a 33 del expediente digital 12):

“Se puede concluir de la relación entre ambas partes que la Sra. Eliana María Guzmán Cañas contaba con la confianza de la Sra. Luz

Mercedes Jiménez, tanto así que la autorizaba en forma previa y **a veces de forma tácita el uso del dinero en EFECTIVO** que entraba al establecimiento de comercio para pago relativos al funcionamiento y cómo lo expresan ambas partes para pagos personales de la Sra. Eliana María Guzmán Cañas ya fuera préstamos personales o ajustes de quincenas.

Se concluye de los descargos que existían procedimiento adecuado para el uso de este efectivo el cual consistía en que debía pasar por un proceso de liquidación y revisión de la Sra. Luz Mercedes Jiménez previo a la disposición del dinero o cómo lo expresa la Sra. Eliana María Guzmán Cañas por lo menos con una autorización verbal expresa de su jefe directa.

Se concluye los descargos que el día del pago de la quincena de la Sra. Eliana María Guzmán Cañas era el 20 de junio de 2022 y como era festivo el pago estaba previsto para realizarse el día hábil siguiente 21 de junio de 2022 en el con el dinero en EFECTIVO que entrara de las clientas de los días 17 y 18 de junio y así lo manifestó Luz Mercedes Jiménez, su jefa directa. Versión confirmada por ambas partes.

Se concluye de los descargos que los días 17 y 18 de junio y específicamente el pago recogido de la clienta la señora Viviana luengas no entró en EFECTIVO.

De la anterior se establece que no existiendo dinero en efectivo disponible para que la Sra. Eliana María Guzmán Cañas **actuara conforme lo venía haciendo en quincenas previas realizados anticipos o ajustes de quincena**, no existía otra opción que esperar el día 21 de junio 2022 a que la Sra. Luz Mercedes Jiménez le hiciera el pago de su quincena en efectivo como venía acostumbradas las partes..." (Resalto de la Sala)

- En el interrogatorio de parte rendido por la Sra. Luz Mercedes Patiño Jiménez, expresó que la demandante se había tomado los \$500.000 porque no le había pedido autorización; que la Sra. Eliana María Guzmán Cañas quería un adelanto de su prima y el 17 de junio le manifestó que necesitaba dinero y le preguntó por su pago de la prima, que ante dicha necesidad, la demandada le dijo que al día sábado iba una usuaria, que le informara, esa usuaria cuanto iba a pagar y para ella decirle cuanto le iba a abonar de la prima y el 30 de dicho mes le terminaba de cancelar, pero la demandante nunca la llamó y se enteró de lo sucedido el martes.

En la misma oportunidad, aceptó la Sra. Luz Mercedes Patiño Jiménez que era recurrente que la demandante se hiciera autopréstamos de los que se enteraba cuando iba a cuadrar caja y le decía que los pagaba con la quincena, lo cual indisponía a la demanda; que la demandada confiaba en la Sra. Eliana María Guzmán Cañas pero esta la manipulaba y enredaba y por la confianza que le tenía no le mandó memorandos.

- La confianza a la que se refirió la Sra. Luz Mercedes Patiño Jiménez fue igualmente evidenciada con la declaración de la Sra. Nancy del Socorro Ríos Jiménez quien manifestó que la accionante era la mano derecha de la empleadora y era la encargada de realizar el pago y manejo de los dineros que ingresaban al establecimiento de comercio. Y la testigo Claudia Elena Zapata le dio la denominación a la Sra. Eliana María Guzmán Cañas de ser su segunda jefe.

Conforme a la justa causa imputada a la parte demandante, y si bien es cierto no se indicó una causal legal, la misma se puede encasillar en el numeral 6º del art. 62 del CST que reza *“6. Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos.”*

Violación grave que para esta Corporación no puede ser imputada a la demandante a efectos de justificar el despido, bajo el entendido que la Sra. Luz Mercedes Patiño Jiménez aceptó en la carta de despido, la existencia de confianza entre ambas partes al punto de autorizar “en forma previa y a veces de forma tácita el uso del dinero en EFECTIVO”; adicionalmente, la compañera de trabajo de la demandante y la Sra. Nancy del Socorro Ríos Jiménez conocían la autonomía que manejaba la accionante en la administración del establecimiento de comercio al punto de ser llamada “segunda jefa” y por si fuera poco, la misma empleadora permitió y pasó por alto eventos en que la demandante tomaba decisiones en el manejo del dinero sin su consentimiento.

Aunado a lo anterior, asegura la parte accionada, que las autorizaciones solo era dadas para el manejo del dinero en efectivo, no obstante, no existe prueba que así lo demuestre, por el contrario, acepta la demandada en la carta de despido la existencia de autorizaciones tácitas del dinero.

5. Afiliación y pago de aportes a la seguridad social

Se CONFIRMARÁ la decisión de primera instancia, en el entendido que el cálculo actuarial, se utiliza en materia pensional para los empleadores que no afiliaron a su trabajador a la seguridad social o ante el incumplimiento de la obligación del empleador de reportar la novedad de ingreso de un nuevo trabajador a su empresa, a través de una reserva actuarial o un título

pensional, con base en parágrafo 1º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 que reza:

“PARÁGRAFO 1o. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo, se tendrá en cuenta:

(...)

d) El tiempo de servicios como trabajadores vinculados con aquellos empleadores que por omisión no hubieren afiliado al trabajador.

(...)

En los casos previstos en los literales b), c), d) y e), el cómputo será procedente siempre y cuando el empleador o la caja, según el caso, trasladen, con base en el cálculo actuarial, la suma correspondiente del trabajador que se afilie, a satisfacción de la entidad administradora, el cual estará representado por un bono o título pensional.”

En ese sentido, pese a la afirmación dada por la Sra. Nancy del Socorro Ríos Jiménez, quien indicó que la Sra. Luz Mercedes Patiño Jiménez le informó que antes del año 2020 pagaban aportes a la seguridad social con un tercero, de ello no existe prueba y por el contrario, en la historia laboral de Colpensiones y de Porvenir S.A. solo se extrae aportes realizados por la demandante en calidad de trabajadora independiente desde julio de 2020.

Y en relación a los aportes realizados por la Sra. Eliana María Guzmán Cañas en calidad de trabajadora independiente, la parte pasiva de la litis aportó (fls. 34 a 47 del expediente digital 12):

- Reporte de planilla de ARUS
- Recibos de pagos realizados por Banco de Bogotá, cuyos números de factura corresponde con el pin que aparece en el soporte de pago de ARES

Prueba que como se indicó en primera instancia, no es soporte para determinar que dichos pagos provinieran de la Sra. Luz Mercedes Patiño Jiménez en calidad de empleadora, toda vez que al estar la demandante afiliada como trabajadora independiente era a ella a quien le correspondía asumir la totalidad de la cotización, siendo carga de la prueba de la accionada haber acreditado la entrega del dinero para el pago del sistema de seguridad social sin que lo haya hecho.

Por otro lado, no es creíble que la testigo Sra. Nancy del Socorro Ríos Jiménez asegure que el dinero provenía de la accionada, en vista que nunca conoció

personalmente a la demandante, dicha testigo solo se encargaba de realizar la nómina y obtener el código de pago e imprimir la planilla de pago, documentos que ella imprimía y le enviaba a la demandante, en ningún momento dijo haber ido al establecimiento de comercio donde laboraba la demandante ni mucho menos informó haber presentado que la Sra. Luz Mercedes Patiño Jiménez le entregara dinero o autorizara a la accionada a sacar dinero para realizar el pago de dicha planilla. En consecuencia, en este aspecto en concreto, los dichos de la testigo recaen en lo que la accionada le manifestó y no en lo que presencié.

Por lo expuesto se CONFIRMARÁ la condena impuesta en relación a los aportes a la seguridad social en pensiones.

6. Monto de las costas procesales impuestas

Debe anotarse que en posición pacífica del Tribunal Superior de Medellín, con respecto a la liquidación de las agencias en derecho en la sentencia, los reproches con respecto a estas, solo son recurribles una vez realizada la liquidación de costas, debiendo esperar a que se liquiden las costas en primera instancia, y en caso de existir inconformidad alguna del auto que las liquida, se debe interponer el recurso de reposición conforme a lo estipulado en el CGP.

Sin costas en esta instancia.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, y administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, EN SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE la condena impuesta por concepto de auxilio de transporte, y en su lugar se **CONDENAR** a la Sra. Luz Mercedes Patiño Jiménez a reconocer y pagar a la demandante, la suma de **\$3.875.437** por el auxilio de transporte causado desde el 22 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2021, conforme lo manifestado en la parte motiva de la providencia y la tabla que reposa en la parte considerativa.

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás, la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Sin costas en esta instancia.

CUARTO: Las anteriores decisiones se notifican por EDICTO, conforme lo dispuesto en la providencia AL 2550, radicación 89628 del 23 de junio de 2021 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

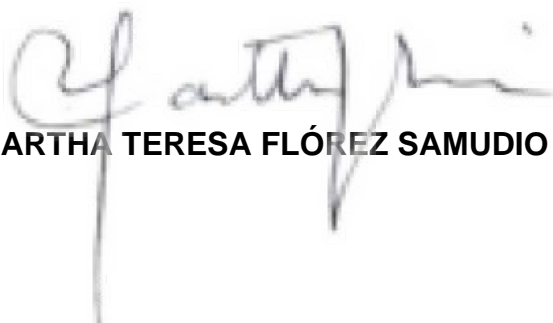
Los magistrados



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO



SECRETARÍA SALA LABORAL
EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín
notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

DEMANDANTES	: ELIANA MARÍA GUZMÁN CAÑAS
DEMANDADO	: LUZ MERCEDES PATIÑO JIMÉNEZ
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-360-31-05-001-2022-00240-01
RADICADO INTERNO	: 008-24
DECISIÓN	: MODIFICA PARCIALMENTE Y CONFIRMA SENTENCIA

Magistrado Ponente
HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial
<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/162>
por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento
del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN
Fijado el 13 de marzo de 2024 a las
8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Se desfija el 13 de marzo de 2024 a la 5:00pm


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO